Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **08525/INFOEM/IP/RR/2023**, interpuesto por el **C. XXXXXXXXXXXXXX**, que en lo sucesivo será la parte **Recurrente,** en contra de la respuesta por parte del **Ayuntamiento de Tenango del Valle,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**A N T E C E D E N T E S**

**PRIMERO. Solicitud de acceso a la información.**

Con fecha **veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés,** la parte **Recurrente** presentó, través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número **00411/TENAVALL/IP/2023,** mediante la cual requirió la información siguiente:

*“Que informe la Síndico Municipal de Tenango del Valle, México, si ha comprometido recursos públicos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su caso remita copia certificada, la fecha del documento y en su caso la fecha de publicación” (sic)*

**Modalidad de Entrega:** A través de SAIMEX.

**SEGUNDO.- De la Respuesta del Sujeto Obligado.**

En fecha **doce de diciembre de dos mil veintitrés** el sujeto obligado notificó mediante el SAIMEX lo siguiente:

*“Se remite oficio de contestación a la solicitud de información.” (Sic).*

Adjuntando los archivos electrónicos denominados “***411.pdf***” y “***Contestacion 411.pdf***”, los cuales serán analizados en la parte considerativa de la presente resolución.

**TERCERO. Interposición del recurso de revisión.**

Inconforme con la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **catorce de diciembre de dos mil veintitrés,** la parte recurrente interpuso el recurso de revisión al que le recayó el número **08525/INFOEM/IP/RR/2023** a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**Acto impugnado:**

*“Oficio SM/TV/441/2023, del 12 de diciembre de 2023, signado por Gabriela Castrejón Mejía”*

**Razones o motivos de inconformidad**:

*“Me causó agravio que la Sindico señalara la inexistencia de algún documento en la cual se comprometiera recurso público ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando en la página oficial del Ayuntamiento de Tenango del Valle, México, la cual la puedo ver en FACEBOOK y precisamente en la sesión de cabildo del 29de noviembre de 2023, se hizo referencia a un convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Tenango del Valle, México representado por Gabriela Castrejón Mejía y por la otra la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y que dispuso de recurso económico del ayuntamiento para hacer pagos; por lo que de manera ilegal, con desvío de poder, de manea arbitraria y por demás ilegal se realizó falsas declaraciones ante autoridad diversa a la judicial y se me oculta información que pretendo saber la fecha y dónde la puedo consultar Por ello se deberá exigir a la Síndico que omita emitir declaraciones falsas y se me otorgue el o los documentos que fueron referidos en la Sesión de CAbildo del 29/11/2023” (sic)*

**CUARTO. Del turno del recurso de revisión.**

El medio de impugnación presentado mediante recurso de revisión con número **08525/INFOEM/IP/RR/2023**, fue turnado al **Comisionado Presidente José Martínez Vilchis**, mediante el sistema electrónico, en términos del arábigo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, recayendo acuerdo de admisión en fecha **veinte de diciembre de dos mil veintitrés**, determinándose en él, un plazo de siete días para que las partes manifestaran lo que a su derecho corresponda en términos del numeral ya citado.

**QUINTO. De la etapa de manifestaciones y/o alegatos.**

De las constancias del expediente electrónico del SAIMEX, del recurso de revisión **08525/INFOEM/IP/RR/2023**, se advierte que el Sujeto Obligado rindió informe justificado mediante el cual en lo medular ratifica su respuesta, asimismo, se hizo constar que el particular no realizó manifestación alguna que conviniera a sus intereses.

**SEXTO. Del cierre de instrucción.**

Así, una vez transcurrido el término legal, se decretó el cierre de instrucción del recurso de revisión en fecha **veintinueve de enero de dos mil veintitrés**, en términos del artículo 185 Fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto, y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el Recurrente conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 6, 9 fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. De los alcances del Recurso de Revisión.**

Anterior a todo debe destacarse que el recurso de revisión tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente y será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

**TERCERO. Del estudio de las causas de improcedencia.**

El estudio de las causas de improcedencia que se hagan valer por las partes o que se advierta de oficio por este Resolutor debe ser objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto ya que el estudio de los presupuestos procesales sobre el inicio o trámite de un proceso genera eficacia jurídica de las resoluciones, más aún que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia la cual impide su estudio y resolución cuando una vez admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseer el recurso de revisión sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines[[1]](#footnote-1).

Por lo que una vez que se analizó el expediente en estudio se cae en la cuenta de que no se actualiza ninguna de las casuales a continuación transcritas:

*“****Artículo 191.*** *El recurso será desechado por improcedente cuando:*

*I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley, a partir de la respuesta;*

*II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial de la Federación algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;*

*III. No actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;*

*IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley;*

*V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;*

*VI. Se trate de una consulta, o trámite en específico; y*

*VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.”*

Ya que no fue interpuesto de forma extemporánea, no se está tramitando ante el Poder Judicial Federal, no es una consulta, o trámite en específico, ni tampoco se advierte que el recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, por lo que al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio, este Órgano Garante de la Transparencia se avoca al análisis del fondo del asunto que nos ocupa.

Así las cosas, al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio por este Resolutor, se procede al análisis del fondo de los asuntos en los siguientes términos.

**CUARTO. Del estudio y resolución del asunto.**

Ahora bien, se procede al análisis del presente recurso, así como al contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para así estar en posibilidad este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el artículo 8, de la Ley de Transparencia local.

Este Órgano Garante considera pertinente analizar si El Sujeto Obligado es la autoridad competente para conocer de dicha solicitud, es decir, si se trata de información que deba generar, administrar o poseer por virtud del ámbito de sus atribuciones y si la misma se trata de información pública; por ello, es pertinente enfatizar lo que debe entenderse por derecho de acceso a la información pública, siendo importante traer a contexto el contenido del artículo 6°, letra A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente señala:

***“Artículo 6o.*** *. . .*

***A.*** *Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

***I.*** *Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

***II.*** *La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

***III.*** *Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

***IV.*** *Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.*

***V.*** *Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.*

***VI.*** *Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.*

***VII.*** *La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.****”***

*(Énfasis añadido)*

En el mismo sentido, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 5°, párrafos vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo fracciones I, III y IV, dispone lo siguiente:

***“Artículo 5. …***

*. . .*

***El derecho a la información será garantizado por el Estado.***

*La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

*Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:*

***I.******Toda la información en posesión de*** *cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de* ***cualquier*** *persona física, jurídica colectiva o* ***sindicato que reciba y ejerza recursos públicos*** *o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

***III.*** *Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

***IV.*** *Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial que establece esta Constitución.”*

*(Énfasis añadido)*

Ya que el planteamiento del problema es de toral importancia, a efecto de determinar la intención o voluntad del recurrente a la luz de la interpretación de la solicitud de información, y que puede generar de forma objetiva y material el sujeto obligado que se relacione con esa intención, respecto del presente asunto se realiza a continuación.

Ahora bien, se procede al análisis del presente recurso, así como al contenido íntegro de las actuaciones que obran en los expedientes electrónicos, para así estar en posibilidad este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Transparencia local, es así que el recurrente solicitó:

1. Que informe la Síndico Municipal de Tenango del Valle, México, si ha comprometido recursos públicos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su caso remita copia certificada, la fecha del documento y en su caso la fecha de publicación.

En respuesta a la solicitud de información el Sujeto Obligado adjuntó los siguientes archivos electrónicos:

1. ***“411.pdf”***.- Oficio número SM/TV/441/2023 de fecha 12 de diciembre de 2023, signado por la Licenciada Gabriela Castrejón Mejía en su carácter de Síndico Municipal, mediante el cual informa la siguiente:

“*Respecto a la solicitud presentada le informo que, la Síndico Municipal,* ***NO*** *comprometido recursos públicos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.*”

1. ***“Contestacion 411.pdf”***.- Oficio número TDV/UTAI/1425/2023 de fecha 12 de diciembre de 2023, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual informa a la recurrente que adjunta la respuesta de la sindicatura a través del oficio SM/TV/441/2023.

Inconforme con la respuesta, el recurrente en su recurso de revisión adujó como razones o motivos de inconformidad: *“Me causó agravio que la Sindico señalara la inexistencia de algún documento en la cual se comprometiera recurso público ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando en la página oficial del Ayuntamiento de Tenango del Valle, México, la cual la puedo ver en FACEBOOK y precisamente en la sesión de cabildo del 29de noviembre de 2023, se hizo referencia a un convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Tenango del Valle, México representado por Gabriela Castrejón Mejía y por la otra la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y que dispuso de recurso económico del ayuntamiento para hacer pagos; por lo que de manera ilegal, con desvío de poder, de manea arbitraria y por demás ilegal se realizó falsas declaraciones ante autoridad diversa a la judicial y se me oculta información que pretendo saber la fecha y dónde la puedo consultar Por ello se deberá exigir a la Síndico que omita emitir declaraciones falsas y se me otorgue el o los documentos que fueron referidos en la Sesión de CAbildo del 29/11/2023*” (sic), manifestaciones que se consideran fundadas ya que si bien se pronunció la Sindicatura Municipal, lo cierto es que la unidad administrativa que por sus funciones puede contar con la información solicitada es la Tesorería Municipal ya que de acuerdo al Bando Municipal de Tenango del Valle le corresponden las siguientes:

*“****Artículo 31****. Para el despacho de los asuntos municipales, el Ayuntamiento se auxiliará de las dependencias y las entidades de la administración pública municipal que considere necesarias, las cuales estarán subordinadas al Presidente Municipal, mismas que a continuación se enlistan:*

*I. CENTRALIZADAS*

*…*

***2. Tesorería Municipal;***

*…*

***Artículo 36****. La tesorería municipal es el órgano encargado de la recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones que haga el ayuntamiento.*

***Artículo 37****. Son atribuciones del tesorero municipal:*

*I. Administrar la hacienda pública municipal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;*

*II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en términos de las disposiciones aplicables;*

*III. Imponer las sanciones administrativas que procedan por infracciones a las disposiciones fiscales;*

*IV. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos, e inventarios;*

*V. Proporcionar oportunamente al ayuntamiento todos los datos o informes que sean necesarios para la formulación del Presupuesto de Egresos Municipales, vigilando que se ajuste a las disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos aplicables;*

*VI. Presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación contable financiera de la Tesorería Municipal;*

*VII. Proporcionar para la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos Municipales la información financiera relativa a la solución o en su caso, el pago de los litigios laborales;*

*VIII. Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestaciones, avisos y declaraciones y demás documentos requeridos;*

*IX. Participar en la formulación de Convenios Fiscales y ejercer las atribuciones que le correspondan en el ámbito de su competencia;*

*X. Proponer al ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables;*

*XI. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen en favor de la hacienda municipal;*

*XII. Proponer la política de ingresos de la tesorería municipal;*

*XIII. Intervenir en la elaboración del programa financiero municipal;*

*XIV. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes;*

*XV. Ministrar a su inmediato antecesor todos los datos oficiales que le solicitare, para contestar los pliegos de observaciones y alcances que formule y deduzca el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;*

*XVI. Solicitar a las instancias competentes, la práctica de revisiones circunstanciadas, de conformidad con las normas que rigen en materia de control y evaluación gubernamental en el ámbito municipal;*

*XVII. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento;*

*XVIII. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y responsabilidad que haga el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, así como atender en tiempo y forma las solicitudes de información que éste requiera, informando al Ayuntamiento;*

*XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, por acuerdo expreso del Ayuntamiento y cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; XX. Recaudar y administrar los ingresos que se deriven de la suscripción de convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias de coordinación; los relativos a las transferencias otorgadas a favor del Municipio en el marco del Sistema Nacional o Estatal de Coordinación Fiscal, o los que reciba por cualquier otro concepto; así como el importe de las sanciones por infracciones impuestas por las autoridades competentes, por la inobservancia de las diversas disposiciones y ordenamientos legales, constituyendo los créditos fiscales correspondientes;*

*XXI. Dar cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y demás que en materia hacendaria celebre el Ayuntamiento con el Estado; XXII. Entregar oportunamente a él o los Síndicos, según sea el caso, el informe mensual que corresponda, a fin de que se revise, y de ser necesario, para que se formulen las observaciones respectivas; y*

*XXIII. Las que les señalen las demás disposiciones legales y el ayuntamiento.”*

Como podemos apreciar al tesorero Municipal le corresponde entre otras obligaciones las de Administrar la hacienda pública municipal, realizar actividades relacionadas con la recaudación, fiscalización y administración de contribuciones, llevar registros contables, financieros y administrativos, proporcionar datos para la formulación del Presupuesto de Egresos Municipales, presentar informes anuales sobre la situación contable y financiera, participar en la formulación de convenios fiscales.

En ese sentido al Tesorero Municipal le corresponde conocer o saber si el ayuntamiento ha comprometido recursos públicos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que el tesorero es responsable de administrar la hacienda pública municipal, lo que incluye la gestión eficiente de los recursos financieros, saber si se han comprometido recursos ante la SHCP es esencial para planificar adecuadamente la disponibilidad de fondos y cumplir con los compromisos financieros adquiridos.

Conocer los compromisos financieros del Ayuntamiento ante otras instituciones es esencial para la elaboración del presupuesto municipal, permite al tesorero tener una visión clara de las obligaciones financieras que debe atender el ayuntamiento, lo que facilita la planificación a corto y largo plazo.

La relación entre el ayuntamiento y otras dependencias puede involucrar acuerdos, convenios, o transferencias de recursos que deben cumplir con regulaciones y normativas legales en donde el tesorero debe asegurarse de que el ayuntamiento cumpla con todas las obligaciones legales y normativas en relación con estos compromisos.

La preparación de informes financieros, incluyendo la situación contable y financiera, requiere que el tesorero esté al tanto de todos los compromisos financieros contraídos por el ayuntamiento.

Sin embargo, del expediente electrónico del SAIMEX no se aprecia que la solicitud de información se haya turnado a la Tesorería Municipal, como se aprecia a continuación:

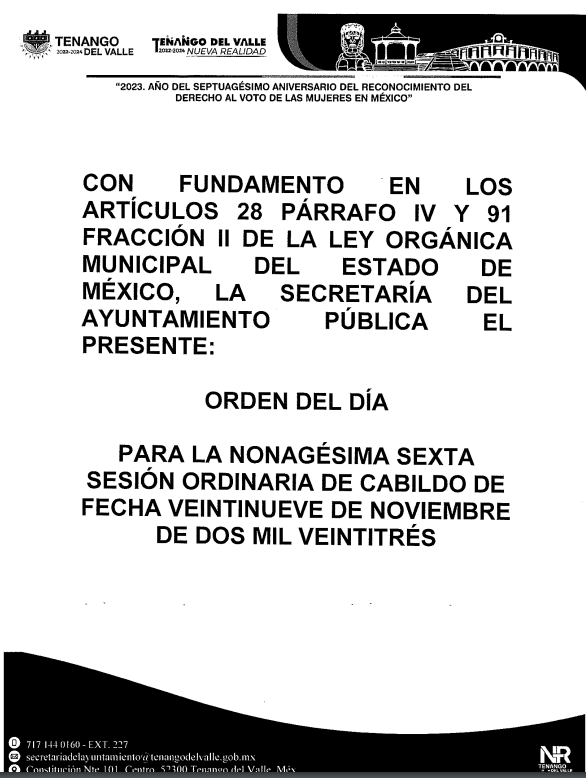
Sólo se turnó a la síndico



Cabe precisar que en la siguiente liga electrónica:

https://tenangodelvalle.gob.mx/Orden\_del\_d%c3%ada/ORDEN%20DEL%20D%c3%8dA%2096%20ORDINARIA.pdf

Se aprecia lo siguiente:



Es la fecha del acta de cabildo a que se refiere el hoy recurrente, en su solicitud de información.

(29-11-2023)

**En cuya orden del día se aprecia lo siguiente:**

1. “*Lectura, análisis y en su caso aprobación de la* ***propuesta de condonar la afectación de las participaciones al municipio derivado del crédito fiscal*** *determinado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle;*
2. *Lectura, análisis y en su caso aprobación para otorgar apoyo financiero al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Valle,* ***para el pago del crédito fiscal*** *determinado por* ***el Servicio de Administración Tributaria****;*
3. *Lectura, análisis y en su caso aprobación para otorgar apoyo financiero al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Valle, para compensar los pagos derivados por la terminación de la relación laboral.*”

Se considera que pudiera ser que el pago del crédito fiscal en referencia, es al que se refiere el recurrente como el compromiso presupuestario de la Síndico con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, es la Tesorería la que debe dar atención a la solicitud de información.

Asimismo, este Órgano Garante considera que el Titular de la Unidad de Transparencia en uso de sus funciones debió turnar la solicitud de información a las unidades administrativas que por razón de sus atribuciones deben contar con la información solicitada, lo anterior es así ya que las unidades administrativas que pudieran dar atención, no supieron de la solicitud de información porque el Titular de la Unidad de Transparencia no se las giró a pesar de ser quienes pudieran contar con la información solicitada.

En ese orden de ideas, si bien es cierto que la Titular de la Unidad de Transparencia es la encargada de dar atención a las solicitudes de información con fundamento en los artículos 50 y 53 fracciones II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, también lo es que, dentro de sus propias funciones se encuentra la de tramitar ante las Áreas poseedoras de la información lo que se solicita, a efecto de entregarla al solicitante, de acuerdo a la forma en que la Unidad Administrativa correspondiente, la genere, recopile, administre, maneje, procese, archive o conserve, esto de conformidad con los artículos 51 y 53 fracción IV de la Ley en cita, que refieren:

**Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios**

*“Artículo 50. Los sujetos obligados contarán con un área responsable para la atención de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia.*

*Artículo 51. Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes.* ***Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información*** *y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o reservada. Dicha Unidad contará con las facultades internas necesarias para gestionar la atención a las solicitudes de información en los términos de la Ley General y la presente Ley.*

*…*

*Artículo 53. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes funciones:*

*…*

*II. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;*

*…*

***IV. Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;***

*V. Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada;*

*VI. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;”*

Lo anterior es así ya que derivado de la solicitud número **00411/TENAVALL/IP/2023** (en la que se resuelve), se aprecia en el sistema SAIMEX, que la servidora pública en comento, no tramitó ante todas las instancias del Ayuntamiento, que pudieran tener lo solicitado (derivado de sus funciones) lo requerido por el particular.

Es decir, no se generó algún requerimiento o tramite interno por parte de la Titular de la Unidad de Transparencia que se haya dirigido a alguna otra dependencia del ayuntamiento, ya que no se adjuntó archivo electrónico alguno.

Por lo anterior es que se considera modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto que dé atención a la solitud de información número **00411/TENAVALL/IP/2023,** con fundamento en los artículos 50, 51, 53 fracción IV, 162 y 165, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el artículo 162 es muy categórico al establecer:

*“Artículo 162. Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes* ***se turnen a todas las Áreas*** *competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones,* ***con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable*** *de la información solicitada.”(Énfasis añadido)*

Como se puede apreciar, la Titular de la Unidad de Transparencia deberá garantizar que la solicitud de información se turne a todas las Áreas del Ayuntamiento que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, quienes a su vez deberán realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada en los archivos de las unidades administrativas de las que formen parte.

Bajo ese tenor, es importante hacer del conocimiento de las partes que **EL SUJETO OBLIGADO** deberá realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada; para ello, deberá seguir puntualmente el procedimiento siguiente: los Sujetos Obligados deben contar con un área responsable para la atención de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia; asimismo, deben designar a un responsable para atender dicha Unidad, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes.

Por lo tanto, la información de la que deberá hacer búsqueda exhaustiva y razonable el sujeto obligado es respecto de:

1. Copia certificada del documento que dé cuenta del monto comprometido de recursos públicos del Ayuntamiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde conste la fecha del documento y la fecha de su publicación.

Es necesario establecer que la modalidad de entrega en copias certificadas no implica que se tenga que acudir ante un notario o fedatario público, sino que faculta a los servidores públicos para que expidan certificaciones de los documentos solicitados que obran en los archivos de las dependencias o entidades en copia simple u original según sea el caso.

Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que los servidores públicos tendrán la facultad para la expedición de copias respecto de los documentos que obren en sus archivos, y que el derecho de los particulares de solicitar copias es respecto de los documentos que obran en las oficinas públicas. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido el derecho de los particulares de solicitar copia o testimonio de documentos o piezas que obran en las oficinas públicas y por ende la obligación de las autoridades, de expedir las copias certificadas que les soliciten.[[2]](#footnote-2)

Sirve de apoyo en la fundamentación de lo antes expresado el criterio 2/09 del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que se transcribe a continuación para la claridad de las razones que justifican la actuación de este órgano garante.

***“Copias certificadas. La certificación prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos de la dependencia o entidad.*** *El artículo 40, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé la posibilidad de que el solicitante elija que la entrega de la información sea en copias certificadas. Por su parte, el artículo 44 de la misma ley establece, entre otras cuestiones, que las respuestas a solicitudes se deberán atender en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Considerando que el artículo 1° de la ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de las autoridades, la certificación a que se refiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por efecto constatar que la copia certificada que se entrega es una reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos de la dependencia o entidad requerida. En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene como propósito que el documento certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, tal cual se encuentran.”*

Por su parte, el **artículo 6, segundo párrafo, inciso A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, **todo ello de manera gratuita**; no obstante, dicha gratuidad sólo debe entenderse en lo concerniente al trámite de acceder a la información solicitada, no así a su reproducción en copias certificadas.

El **artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios** establece el principio de gratuidad que consiste en que el acceso a la información pública no genera costo alguno para los solicitantes, sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada conforme la Ley de Transparencia y demás disposiciones aplicables.

Por otra parte **el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios** señala que el acceso a la información es gratuita y solo se cubrirán los gastos de reproducción, o por la modalidad de entrega solicita, así como por el envío, que en su caso genere, de conformidad con los derechos, productos y aprovechamientos establecidos en la legislación aplicable.

La palabra ***acceso***, de acuerdo a la definición establecida por la Real Academia de la Lengua Española, es *la entrada o acercamiento*, concepto que no resulta ser sinónimo de ***reproducción***, pues esta última consiste en una ***la acción y efecto de reproducir o reproducirse; en una cosa qué reproduce o copia un original*, *o bien, en la copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos***. Por tanto, el acceso de la información pública no implica que el poseedor de ésta la reproduzca de forma gratuita.

El **artículo 150 de la Ley de Transparencia Local** señala que el procedimiento de acceso a la información es la garantía primaria del derecho y se rige por los principios de simplicidad, rapidez, gratuidad del procedimiento.

El **artículo 155 de la Ley de Transparencia local** engloba los requisitos para presentar una solicitud por escrito, destacando en la **fracción V**, lo relativo a la modalidad de entrega de la información (SAIMEX, CD-ROM, USB, consulta directa, copias simples, copias certificadas, otros).

Por su parte **el artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios** establece que el **principio de gratuidad** rige al ejercicio del derecho de acceso a la información, y en atención de ello, **ciñe los costos** de reproducción de la información a lo que disponga la normatividad aplicable, la cual deberá considerar que los montos que determine aplicables permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso, precepto legal que a la letra dice:

***Artículo 174.*** *En caso de existir costos para obtener la información deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:*

*I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;*

*II. El costo de envío, en su caso; y*

*III. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda.*

*Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse, en su caso, en el Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables, las cuales se publicarán en los sitios de internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información.*

*Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable el Código Financiero del Estado de México y Municipios deberán establecer cuotas que no sean mayores a las dispuestas en dicho ordenamiento.*

*La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante, en términos de los lineamientos que expida el Instituto.*

De igual forma, el artículo en comento prevé expresamente que la información deberá ser entregada **sin costo**, cuando implique la entrega de **no más de veinte “hojas simples”**, y prevé que no podrá fijarse un servicio o medio que implique un costo para la presentación de solicitudes.

El principio de gratuidad consiste en que la información pública no genera costo alguno para los solicitantes, **solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.**

La certificación de documentos es un acto materialmente administrativo, mediante el cual **se da fe respecto del lugar, tiempo y circunstancias derivadas de soportes documentales.** Es decir, es un servicio que presta el Estado, sus organismos y los Municipios, en funciones de derecho público y que se sujetan al pago de un derecho o contribución en términos de los artículos 9, fracción III, 17 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que una de las obligaciones de los mexicanos estriba en contribuir al gasto público de la Federación, Estados, Ciudad de México y del Municipio de residencia, de forma proporcional y equitativa.

Por su parte, el artículo 7 del Código Financiero del Estado de México y Municipios establece que, para cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo, el Estado y los Municipios percibirán en cada ejercicio fiscal **los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos, aprovechamientos, ingresos derivados de la coordinación hacendaria, e ingresos provenientes de financiamientos, establecidos en la Ley de Ingresos.** Tratándose del Estado, también percibirá las aportaciones y cuotas de seguridad social.

Al respecto, **el artículo 9, fracción II del Código Financiero del Estado de México y Municipios** dispone que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras **y derechos**, y que estos últimos **se tratan de las contraprestaciones establecidas que deben pagar las personas físicas y jurídicas colectivas, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Entidad, así como por recibir servicios que presten el Estado, sus organismos y Municipios en funciones de derecho público**, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en este Código. También son derechos las contribuciones que perciban los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

De lo anterior, se desprende que los derechos cuentan con las siguientes características[[3]](#footnote-3):

* **Son contribuciones,** en términos de lo previsto en el artículo 9, fracción II del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
* **Los derechos deben estar establecidos en una ley.** Esto es, se debe exigir que éstos se establezcan en una ley, en previsión a lo dictado en el artículo 31, fracción VI de la Carta Magna, por lo que al seguir la misma suerte de las contribuciones deben tutelar el principio de legalidad.
* **Deben pagarse derechos por servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público,** ya que, si se tratara de ingresos por funciones del Estado como particular, estaríamos frente a los productos.
* **Por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la entidad tiene que pagarse derechos.**

Se considera que para la determinación del monto a pagar por concepto de derechos debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que este sea fijo e igual para todos los que reciban servicios análogos, características que distinguen a los derechos de las demás contribuciones; en consecuencia, para que se cumpla con los principios de proporcionalidad y equidad que establece la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe existir un equilibrio razonable entre el monto a pagar y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio.

En tal consideración, al tratarse de contribuciones, los derechos se encuentran sujetos a los **principios** en materia tributariaestablecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: **(i) generalidad, el cual implica que la ley debe abarcar a todas las personas cuya situación particular se ubique en la hipótesis contenida en ella, el cual al realizarse provoca el surgimiento de la obligación fiscal**; (ii) uniformidad, referente a que los sujetos pasivos se ubiquen en el mismo supuesto impositivo, se les impongan obligaciones iguales; (iii) justicia impositiva, consistente en el adecuado reparto de las cargas pública; (iv) **legalidad tributaria, consistente que ninguna autoridad fiscal puede emitir un acto o resolución que no sea conforme a una ley expedida con anterioridad;** (v) capacidad contributiva, referente al establecimiento de contribuciones según la posibilidad económica de cada individuo, determinándose con base en el ingreso de la persona.[[4]](#footnote-4)

De esta suerte, **la obligación fiscal** surge cuando el fisco (sujeto activo, exige al contribuyente (sujeto pasivo) una prestación pecuniaria; así, en tratándose de derechos, el vínculo tributario se genera cuando el particular provoca la prestación de servicio y, en consecuencia, el pago del precio es obligatorio.

De tal manera, para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.[[5]](#footnote-5)

Por lo anterior, se advierte que, respecto de los costos de reproducción, como fue mencionado, el Código Financiero del Estado de México y Municipios establece que el **pago de derechos corresponde a la recepción de un servicio** que presta el Estado en sus funciones de derecho público, entre los que se encuentra la expedición de copias certificadas.

En este sentido, la modalidad seleccionada por **la Recurrente** se encuentra regulada por el Código Financiero del Estado de México y Municipios en su artículo 148, fracción II, aplicable al **Sujeto Obligado** al estar incluido en el Capítulo II “De los Derechos” del Título Cuarto “De los Ingresos de los Municipios”, porción normativa que dispone a la literalidad lo siguiente:

***“Artículo 73.-*** *Por la expedición de documentos solicitados en el ejercicio del derecho a la información pública, se pagarán los derechos conforme a la siguiente:*

*TARIFA*

***Concepto NÚMERO DE VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDA DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE***

*I. Por la expedición de copias simples:*

*A). Por la primera hoja. 0.224*

*B). Por cada hoja subsecuente. 0.016*

*II.* ***Por la expedición de copias certificadas****:*

***A). Por la primera hoja. 0.850***

***B). Por cada hoja subsecuente. 0.417***

*(…)”*

Del mismo modo, **el Código Financiero del Estado de México en su artículo 18**, establece que cuando las **disposiciones fiscales, que establezcan cargas a las personas, incluidas las asociaciones en participación, las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijen las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta**. Se considera que establecen cargas a las personas, incluidas las asociaciones en participación las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las contribuciones.

Derivado de lo anterior, estimamos que es innegable que el ejercicio del derecho de acceso, tiene como principio fundamental, el de la gratuidad, y si bien es el eje rector del procedimiento en sí mismo, que comprende desde la solicitud hasta la entrega de la información que obra en los archivos de los sujetos obligados, la gratuidad no puede hacerse extensiva a cuestiones que por ley se prevén de manera distinta, pues en cuanto al tema de los costos por concepto de reproducción de copias certificadas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, establece expresamente el pago por dicho concepto, cuando la modalidad de entrega sea en copia certificada, incluso, condicionan la entrega a dicho pago, lo cual no puede ser obviado en las resoluciones que emita este Órgano Garante, bajo el principio de legalidad.

Lo anterior responde al hecho de que la certificación de documentos, en términos del Código Financiero del Estado de México y Municipios, configura un servicio que presta el Estado en sus funciones de derecho público, por el cual debe pagarse una contraprestación que se contabiliza como un ingreso por parte de los sujetos obligados.

Luego entonces, si bien el principio de gratuidad rige el procedimiento del derecho de acceso a la información, la entrega de la misma en la modalidad de copias certificadas, implica un costo para el Estado, de ahí que resulte necesario que exista un medio de recuperación de tales gastos, en el caso, mediante el pago de un derecho ya establecido en la normatividad aplicable, esto es, una contraprestación que deben pagar las personas físicas y jurídicas colectivas por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Entidad.

Por lo antes señalado, se insiste, que si bien el acceso a la información pública es gratuito de conformidad con la normatividad aplicable, la entrega de información pública en la modalidad de copias certificadas es un derecho delimitado por el Código Financiero del Estado de México, por lo que se trata de supuestos distintos, es decir, el acceso a la información pública implica el ejercicio del derecho fundamental previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consistente en la facultad de un particular para exigir de la autoridad una acción concreta, protegida directamente por el derecho objetivo; en tanto que la reproducción de la información solicitada implica la utilización de recursos públicos asignados al ente gubernamental.

Tratándose del cobro, por concepto de los servicios que sean prestados por el Estado, se pagarán derechos conforme a las cuotas establecidas para cada caso, como lo son la expedición de copias certificadas; en tal virtud, si bien, se encuentran señalados de manera genérica en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, lo cierto es que, atendiendo al principio de especialidad y por lo que hace al cobro, debemos sujetarnos a las disposiciones, reglas, normas y lineamientos estipulados en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, en tanto que se trata de una norma tributaria.

Por ello, es que se estima que el cobro de derechos por la expedición de copias certificadas deberá ceñirse, en apego al principio de estricto derecho, a las disposiciones en materia tributaria y presupuestaria.

En tal consideración, sin duda, el acceso a la información pública atiende de manera inseparable a la persona que ejerce el derecho, no así a la reproducción y envío de la información solicitada pues es claro que se trata de momentos y supuestos diversos.

Establecido lo anterior, no debe olvidarse que, en cuanto a la certificación de documentos en su poder, los sujetos obligados a los cuales les resulta aplicable el Código Financiero del Estado de México y Municipios, por lo que, indiscutiblemente deben emitir respuesta de acuerdo a lo establecido por la misma, puesto que no se encuentran facultados para no aplicar la misma.

Consecuentemente, al realizar una interpretación del principio de gratuidad y aplicarlo de manera indistinta a las primeras veinte copias certificadas, por un lado, se deja de observar lo dispuesto por el Código Financiero del Estado de México y Municipios que prevé expresamente el cobro por la certificación de documentos, y por el otro, genera un daño al erario público, pues ello se traduce en que el Estado deje de percibir recursos por concepto de prestación de servicios que se encuentran previstos en el referido ordenamiento legal.

Finalmente, se concluye que el cobro por concepto de reproducción de la información en copia certificada, no transgrede la esfera de derechos del solicitante, pues, por un lado, se encuentra previsto en la ley de la materia, y por el otro, como se estableció en *supra* líneas configura una prestación de servicios por parte del Estado, previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Para la entrega de la información en la modalidad solicitada por el particular en el asunto que nos ocupa, los Lineamientos para la Recepción, Trámite y Resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, así como de los recursos de revisión que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, disponen en el numeral treinta y ocho incisos e), f) y h), establecen que en el caso de que la información se haya solicitado en una modalidad que sea técnicamente factible y que constituya un costo de reproducción, se deberá informar al particular el costo total, el lugar y procedimiento para realizar el pago correspondiente; y los horarios en los cuales estará a su disposición la información solicitada, en consecuencia resulta dable ordenar la entrega de la información en la modalidad de copias certificadas con costo.

En mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundados los motivos de inconformidad que arguye **El Recurrente** en su medio de impugnación que fue materia de estudio, por ello con fundamento en la fracción III, del artículo 186,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta a la solicitud de información número **00411/TENAVALL/IP/2023**,que ha sido materia del presente fallo.

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y,

**S E R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por **El Sujeto Obligado** a la solicitud de información número **00411/TENAVALL/IP/2023**, por resultar fundados los motivos de inconformidad vertidos por **El Recurrente**, en términos del Considerando **CUARTO** de esta resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **Sujeto Obligado** haga entrega al **Recurrente** a través del SAIMEX y en copias certificadas, en términos del Considerando **CUARTO** de esta resolución, previa búsqueda exhaustiva y razonable, de lo siguiente:

1. Documento que dé cuenta del monto comprometido de recursos públicos del Ayuntamiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 29 de noviembre de 2023.

*Para lo cual deberá notificar vía SAIMEX el procedimiento que deberá llevar a cabo el recurrente para poder obtener las copias certificadas en mención, incluidos, el costo, los horarios y fechas de atención, teléfono oficial, dirección y nombre personal que lo atenderá.*

*Para el caso de no localizar documentación relativa a recursos públicos municipales comprometidos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bastara que así lo haga saber al recurrente en términos del artículo 19 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.*

**TERCERO.** **Notifíquese**la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO. NOTIFÍQUESE** al **Recurrente** la presente resolución a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)** y hágase de su conocimiento que en caso de considerar que le causa algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 196, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA (EMITIENDO VOTO PARTICULAR CONCURRENTE); SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA (EMITIENDO VOTO PARTICULAR CONCURRENTE) Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JMV/CCR/ROA

1. ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

   *Del examen de compatibilidad de los artículos*[*73 y 74 de la Ley de Amparo*](javascript:AbrirModal(1))*con el artículo*[*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](javascript:AbrirModal(2))***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Ver tesis con los siguientes rubros: “COPIAS CERTIFICADAS, OBLIGACIÓN DE EXPEDIR LAS” con localización: Tesis 265601. . Segunda Sala. Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen CIX, Tercera Parte, Pág. 14; “COPIAS. SÓLO TIENEN VALOR INDICIARIO AUN CUANDO ESTÉN CERTIFICADAS, SI NO HAY CERTEZA DE QUE SE COTEJARON CON LOS ORIGINALES”, con localización: 192413, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Febrero de 2000, Página: 7; “COPIAS, FACULTAD DE CERTIFICACIÓN DE. LA TIENEN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SI LA LEY CORRESPONDIENTE LOS AUTORIZA PARA ELLO, RESPECTO DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN SUS ARCHIVOS, SOBRE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA”, con localización: 196139. I.6o.C.40 K. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, Pág. 631. [↑](#footnote-ref-2)
3. Carrasco Iriarte, Hugo. Derecho Fiscal I. Colección de textos jurídicos. Editorial IURE. México, 2004, páginas 182 y 183. [↑](#footnote-ref-3)
4. Carrasco, 2004, páginas 29 a 31. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tesis 232409. Pleno. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 169-174, Primera Parte, Pág. 23. [↑](#footnote-ref-5)